

**Setenta años
de Constitución Italiana
y cuarenta años
de Constitución Española**
Volumen IV

Sistema de fuentes, Justicia constitucional
y Organización territorial

DIRECTORES:

ANTONIO PÉREZ MIRAS
GERMÁN M. TERUEL LOZANO
EDOARDO C. RAFFIOTTA
MARIA PIA IADICICCO

COORDINADOR:

FERNANDO PÉREZ DOMÍNGUEZ

 **Derecho Público**

eucons

 **BOE** BOLETÍN
OFICIAL DEL
ESTADO

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

Eucons es un proyecto Jean Monnet, financiado por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea, que nace con el objeto de promover el debate académico sobre las bases constitucionales de la construcción europea. Apuesta por el reconocimiento de una “cultura constitucional común europea”, a través de la cual poder afrontar los desafíos de nuestras democracias y del proceso de integración supranacional.

Este diálogo se sustenta en tres pilares: 1) rigor y excelencia académica, para lo cual se cuenta con un comité científico internacional que apoya a la organización y orienta el diseño de las actividades que se realizan; 2) carácter intergeneracional, buscando el diálogo entre las distintas generaciones de universitarios y promoviendo la participación de los más jóvenes junto a consagrados académicos; 3) dimensión europea, tanto por los temas que aborda como por los participantes e integrantes de esta red de investigadores.

Este proyecto está coordinado por Germán M. Teruel Lozano, profesor de Derecho constitucional en la Universidad de Murcia; Antonio Pérez Miras, profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Granada; y por Edoardo C. Raffiotta, profesor de Derecho constitucional de la Universidad de Bolonia. Y colaboran la Universidad de Murcia, como responsable del proyecto, la Escuela Internacional de Doctorado de la UNED, la Escuela de Doctorado de Derecho de la Universidad de Bolonia y el Seminario Ítaloespañol de estudios constitucionales.

Precisamente este último, el Seminario Ítaloespañol, fue el origen de este proyecto. El mismo se creó como un grupo de estudio en 2011 por iniciativa de jóvenes investigadores españoles e italianos, en el ámbito de colaboración entre la Universidad de Bolonia y el Real Colegio de España en Bolonia. Esta red de investigadores ha venido promoviendo la celebración de un congreso bienal desde entonces, con 4 ediciones hasta el momento: Bolonia (2012), Madrid (2014), Catania (2016) y Murcia (2018). Las cuales han dado lugar a distintas obras colectivas que han afrontado diferentes temas de actualidad constitucional: la tutela de los derechos de la persona; la integración europea o cuestiones en relación con la soberanía y la representación en la era de la globalización. El último de ellos ha sido los desafíos del constitucionalismo contemporáneo con ocasión del 70 y 40 aniversario de las Constituciones italiana y española.

SETENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN ITALIANA Y CUARENTA AÑOS
DE CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

CONSEJO ASESOR DE LA COLECCIÓN DE DERECHO PÚBLICO

Directora

Yolanda Gómez Sánchez

Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
Catedrática Jean Monnet, *ad personam*, de la Unión Europea

Manuel Aragón Reyes, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid.

Enrique Arnaldo Alcubilla, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.

Francisco Balaguer Callejón, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada y Catedrático Jean Monnet, *ad personam*, de la UE.

Andrés Betancor Rodríguez, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

María José Ciáurriz Labiano, Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado de la UNED.

Miguel Ángel Collado Yurrita, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Juan Damián Moreno, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Madrid.

Carlos Fernández de Casadevante Romani, Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Teresa Freixes Sanjuán, Catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona y Catedrática Jean Monnet, *ad personam*, de la UE.

Eugeni Gay Montalvo, Abogado.

José María Gil-Robles Gil-Delgado, Catedrático Jean Monnet, *ad personam*, de la UE y Presidente de la Fundación Jean Monnet pour l'Europe.

Vicente Gimeno Sendra, Catedrático de Derecho Procesal de la UNED.

Doctora Tania Groppi, Catedrática de Derecho Público de la Universidad de Siena.

Emilio Jiménez Aparicio, Abogado.

Diego Manuel Luzón Peña, Catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá de Henares.

Fernando Martín Díz, Profesor Titular de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca.

Elisa Pérez Vera, Catedrática de Derecho Internacional Privado de la UNED.

Doctor Nuno Piçarra, Professor of EU Justice and Home Affairs Law de la Nova Universidad de Lisboa.

Miguel Recuerda Girela, Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada.

José Suay Rincón, Catedrático de Derecho Administrativo y Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

Antonio Torres del Moral, Catedrático Emérito de Derecho Constitucional de la UNED.

Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense.

SETENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN ITALIANA Y CUARENTA AÑOS DE CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

ANTONIO PÉREZ MIRAS
GERMÁN M. TERUEL LOZANO
EDOARDO C. RAFFIOTTA
MARIA PIA IADICICCO
(Directores)

FERNANDO PÉREZ DOMÍNGUEZ
(Coordinador)

VOLUMEN IV

Sistema de fuentes, Justicia constitucional
y Organización territorial



eucons



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



FUNDACIÓN CAJAMURCIA

AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES
MADRID, 2020

Primera edición: febrero de 2020



Esta obra está sujeta a licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional, (CC BY-NC-ND 4.0).

En la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, www.boe.es, apartado de *publicaciones*, se incluyen las instrucciones para envío de originales, normas para su presentación y modelo de solicitud de publicación en esta colección que el autor deberá cumplimentar.

La AEBOE no se solidariza con las opiniones sostenidas por los autores de los originales publicados.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Con el patrocinio del Programa Erasmus+ de la Unión Europea y de la Fundación CajaMurcia.

© Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

NIPO AEBOE: 090-20-030-0 (edición en papel).
090-20-031-6 (edición en línea, pdf).
090-20-032-1 (edición en línea, epub).

NIPO CEPC: 091-20-012-5 (edición en papel).
091-20-013-0 (edición en línea, pdf).
091-20-014-6 (edición en línea, epub).

ISBN: 978-84-340-2602-5

Depósito legal: M-37543-2019

IMPRENTA NACIONAL DE LA AGENCIA ESTATAL
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Avenida de Manoteras, 54. 28050 Madrid

LA MODULAZIONE DEGLI EFFETTI TEMPORALI DELLE SENTENZE DI INCOSTITUZIONALITÀ E LA TUTELA INTEGRALE DEI DIRITTI: *RATIO*, CONCRETE APPLICAZIONI E PROSPETTIVE FUTURE

ALICE STEVANATO*
Università degli Studi dell'Insubria

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Obiettivi e *ratio* della modulazione temporale nella prospettiva di garantire esigenze di giustizia sostanziale. 2.1 Contesto sistematico di riferimento: pluralismo e principio di solidarietà. 2.2 Dentro il bilanciamento «successivo»: accertamento dell'omogeneità valoriale e materiale delle posizioni giuridiche oggetto di ponderazione. 2.3 La sentenza n. 10/2015 come esempio di modulazione temporale. 3. Un approccio estensivo della modulazione temporale. 3.1 Dalla teoria alla prassi: alcuni esempi concreti. 4. Aspetti problematici della tecnica modulativa: violazione del requisito di incidentalità del procedimento costituzionale. 5. Conclusioni. 6. Riferimenti bibliografici.

1. INTRODUZIONE

Il tema della gestione del tempo dell'efficacia delle sentenze di accoglimento s'inserisce in una riflessione molto più ampia sul ruolo che la Corte costituzionale ha nel sistema costituzionale italiano e sull'ampiezza dei pro-

* Dottoressa in Giurisprudenza e cultrice della materia in diritto costituzionale nell'Università degli studi dell'Insubria.

pri poteri decisor¹, in quanto poter modulare il periodo temporale di vigenza di una decisione di accoglimento implica valutazioni che i giudici costituzionali conducono con riferimento, soprattutto, all'impatto ordinamentale delle pronunce di accoglimento, ovvero all'insieme delle conseguenze, sociali, culturali ed economiche che una determinata sentenza produrrebbe nel sistema.

La Corte costituzionale si è ben presto convinta che la secca alternativa fra accoglimento e rigetto non era sempre in grado di risolvere in modo adeguato i problemi di costituzionalità e che, quindi, la potestà decisoria della Corte necessitava di strumenti più duttili, come le sentenze di incostituzionalità sopravvenuta, accertata ma non dichiarata, additiva e manipolativa.

All'interno di questa visione flessibile del suo compito istituzionale la Corte si è spinta fino ad affermare espressamente, nella sentenza n. 10 del 2015, che rientra nella propria competenza modulare nel tempo l'efficacia delle sentenze di accoglimento²; intesa in questa prospettiva, la tecnica modulativa rappresenta, senza ombra di dubbio, la sfaccettatura più evoluta, più delicata ma anche più controversa in ordine alla possibile ingerenza della Corte nella sfera d'intervento del Parlamento legislatore.

Gestire il tempo di una decisione di accoglimento significa poter decidere che la perdita di efficacia della normativa incompatibile con la Costituzione non sia necessariamente coincidente con la relativa dichiarazione d'incostituzionalità, per evitare, in questo modo, che l'efficacia della pronuncia possa determinare situazioni ancora più contrastanti con la Costituzione e condurre il suo operato verso una, parimenti pericolosa, «eterogenesi dei fini» (Silvestri, 1989, 64).

Diversamente dalla sentenza di incostituzionalità sopravvenuta, che pure incide sul tempo della pronuncia, è con quella di incostituzionalità differita che i giudici costituzionali si auto-riconoscono titolari di un potere dispositivo del tempo delle pronunce di accoglimento e lo fanno accertando l'incostituzionalità *ab origine* della normativa e ammettendo, di contro, che, in virtù di altri diritti o interessi meritevoli di tutela, la disciplina viziata debba essere considerata efficace fino al giorno successivo alla pronuncia.

¹ Per un approfondimento si veda integralmente il volume *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle sentenze straniere: atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta, il 23 e 24 novembre 1988* (1989).

² Per un approfondimento completo si vedano gli oltre novanta commenti dottrinali alla sentenza n. 10/2015, fra i quali, a titolo d'esempio, D'AMICO, BIONDI (2018), DICKMANN (2015), ROMBOLI, (2015), MORRONE (2015), PINARDI (2015).

Una simile preoccupazione in ordine alle conseguenze materiali delle proprie pronunce di accoglimento e la relativa ricerca di una via processuale con la quale farsi carico del c.d. impatto ordinamentale ha condotto la Corte costituzionale, nella già notissima ordinanza n. 207 del 2018 (anche conosciuta come ordinanza Cappato), a non emanare una sentenza di incostituzionalità, ma un mero atto interlocutorio in attesa di un intervento da parte del Parlamento (rinviando il trattamento della questione al 24 settembre 2019). I giudici costituzionali, infatti, pur riconoscendo l'esistenza di plurimi profili di illegittimità dell'art. 580 c.p, hanno preferito evitare che si creasse un vuoto legislativo che avrebbe lasciato «del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi» (Cons. in diritto § 10).

2. OBIETTIVI E *RATIO* DELLA MODULAZIONE TEMPORALE NELLA PROSPETTIVA DI GARANTIRE ESIGENZE DI GIUSTIZIA SOSTANZIALE

Con la modulazione temporale s'intende arginare l'impatto delle pronunce di incostituzionalità sull'ordinamento, rendendo, in questo modo, «mite» (Groppi, 2002, 217) l'attività decisoria dei giudici costituzionali, così volendo rispondere in modo più adeguato alle esigenze concrete di ogni singolo caso sottoposto alla cognizione della Corte, elidendo (o quanto meno diminuendo) gli effetti negativi che una sentenza di accoglimento secco potrebbe produrre e individuando, quindi, il «punto di minor sofferenza» (Celotto, 2014, 96) tra i diritti e interessi in gioco.

L'insieme di tali prospettive adeguatrici del sistema individua il preciso obiettivo della presente relazione³, cioè individuare come l'assenza di un qualsivoglia potere dispositivo sul tempo è di fatto nocivo per il sistema, in quanto rischia di non tenere adeguatamente in considerazione gli interessi e i diritti che, in alcuni casi, potrebbero venire irreparabilmente lesi da una pronuncia di accoglimento.

Lo scritto si muove in questa dimensione ed è volto a suggerire come, in alcune circoscritte situazioni, che si proveranno ad individuare più avanti, la modulazione temporale può permettere ai giudici di Palazzo della Consulta di poter identificare ed immaginare una tutela globale della Costituzione, anche

³ Si veda STEVANATO (2018).

di ciò che non si vede, anche di ciò che sfugge, consentendo alla Corte di poter valutare, non solo la disciplina normativa sottoposta a giudizio, ma anche il rapporto che si instaura fra la portata retroattiva e altri diritti o principi generali, estranei al contestuale processo costituzionale (che la rigida applicazione della retroattività potrebbe comunque irreparabilmente compromettere).

Questo nuovo, o meglio rinnovato, modo di intendere il ruolo istituzionale della Corte nasce da un'interessante riflessione di alcuni maestri del diritto costituzionale, elaborata già alla fine degli anni '80. Fra questi si ricorda Francesco Saja (1989), allora presidente della Corte costituzionale, il quale, in modo molto puntuale, affermò che la Corte «opera nella realtà sociale, in quella che è la vita del Paese, e non può disinteressarsi delle conseguenze concrete, degli effetti reali delle sue pronunce» (p. 3). In simili fattispecie, i giudici di Palazzo della Consulta, quindi, utilizzano la tecnica del bilanciamento e il canone della ragionevolezza non per formare il proprio convincimento in ordine alla legittimità della norma sottoposta a giudizio, ma, in esito ad un accertamento positivo sull'incostituzionalità di una normativa, per contemperare l'interesse che la sentenza di accoglimento tutela e quello che la retroattività sacrifica. Si potrebbe, dunque, pacificamente affermare che questo tipo di bilanciamento sia inedito e successivo, in quanto non attiene al giudizio di costituzionalità in sé per sé, ma interviene solo dopo la declaratoria di incostituzionalità della normativa sindacata.

2.1 **Contesto sistematico di riferimento: pluralismo e principio di solidarietà**

Nel ricostruire un sistema dal quale poter ricavare alcuni elementi volti a legittimare o, almeno, a giustificare tali decisioni innovative della Corte, è quantomeno opportuno condurre una prima riflessione di ordine generale sul concetto di pluralismo (che sia giuridico, sociale od economico), sul valore essenziale che esso assume nelle moderne democrazie e, per ciò che rileva in questa sede, sullo specifico significato che ha nella Costituzione italiana. Essa può essere intesa, a tal proposito, un vero e proprio *miracolo* democratico, il documento riassuntivo dei diversi interessi e tendenze politiche, sociali ed economiche; in questa prospettiva la Corte costituzionale rappresenta quel presidio volto a tutelare le diverse istanze che animano il Paese, assicurando «un tutela sistemica e non frazionata» (Corte cost. n. 264/2012, Cons. in diritto § 4.1) dei valori riconosciuti e garantiti nel testo costituzionale stesso. A tal proposito, così come il pluralismo nutre la società civile, tesse i legami

sociali, orienta l'attività decisionale degli organi legislativi e, non da ultimo, coinvolge ogni ambito del vivere comunitario, non si dovrebbe escludere sempre e aprioristicamente che una simile contrapposizione di diritti possa generarsi in esito a una decisione demolitoria d'incostituzionalità. Se il tema del conflitto si dipana dal bilanciamento legislativo a quello svolto in sede valutativa dai giudici costituzionali, appare un'illusione pensare che esso non esista, invece, in sede di quantificazione delle conseguenze di una sentenza di incostituzionalità.

A tal proposito si potrebbe richiedere ai giudici della Corte, dopo aver esaurito il giudizio costituzionale, di valutare la situazione fattuale che esso ha prodotto e, calibrando il profilo temporale, di restringere la cerchia dei destinatari. Se si assume che la Corte sia custode della Costituzione nella sua integralità, allora non le si dovrebbe impedire, ma, al contrario, garantire la possibilità di prendersi carico dell'impatto ordinamentale delle sue pronunce, che sia economico, politico o sociale.

All'interno di tale prospettiva, il pluralismo, inteso non solo come un fatto ineliminabile, ma anche come un «valore da preservare» (Pino, 2010, 290) e secondo alcuni «l'unico meta-valore più importante di tutti» (Pino, 2010, 290) gli altri, si serve, per essere concretamente salvaguardato, dell'utilizzo tecnica del bilanciamento fra interessi contrapposti, che, nel caso di specie, si risolve nella modulazione temporale dell'efficacia delle pronunce di accoglimento. Si potrebbe includere nella salvaguardia di quest'ultimo anche la molteplicità delle situazioni soggettive singole o collettive che, in esito a una sentenza di incostituzionalità, potrebbero sorgere. In questa accezione, il pluralismo, quindi, non sarebbe più solamente legislativo ma anche, in un certo senso, giurisdizionale, inteso come sintesi ed equilibrio fra le diverse aspettative meritevoli di tutela della fattispecie concreta sottoposta alla Corte.

Accanto ad una riflessione tesa a valorizzare il carattere pluralistico dei moderni ordinamenti, si potrebbe guardare alla tecnica *de qua* anche sotto un'altra prospettiva ed intentare un ragionamento che muove dal principio solidaristico (art. 2 Cost.), il quale, unitariamente al primo, costituisce una delle basi ideologiche della Costituzione del 1948. La ricostruzione del tema attraverso la lente del principio di solidarietà potrebbe così costituire – o almeno si spera – un'interessante chiave di lettura a favore della modulazione temporale delle decisioni della Corte.

Primariamente – è bene chiarirlo – ci si appella al principio solidaristico non per colmare vuoti o insabbiare mancanze dei pubblici poteri, ma per ricostruire la pretesa del singolo *non solum* in senso intrasoggettivo (in ordine a una relazione diretta e bidirezionale fra il soggetto giuridico e il diritto di cui è

titolare), *sed etiam* in una dimensione intersoggettiva (indagando, così, il complesso rapporto fra i soggetti e le pretese che entrano in contraddizione in esito ad una totale irretroattività di una sentenza d'incostituzionalità). In questo senso, si potrebbe – forse – ammettere un percorso interpretativo che, letto alla luce del principio di solidarietà sociale, sia capace di scardinare la vicissitudine del singolo (o di un gruppo di persone che vanta la medesima pretesa) dalla piana valutazione dei suoi interessi e di elevare l'argomentazione fino al punto di includere la c.d. formazione sociale di appartenenza.

Pur essendo un valore indispensabile per difendere il carattere democratico della nostra società⁴, non è sempre agevole riflettere sul tema della solidarietà perché esso sembra rappresentare un'esigenza anacronistica; la cultura contemporanea è, infatti, sbilanciata nei confronti dei diritti, mentre, al contrario, la solidarietà implica un necessario ripensamento di questi e una valorizzazione dei doveri.

A tal proposito si potrebbe parlare di «pedagogia costituzionale» (Rossi, 2018) nei confronti dei doveri, in quanto la dimensione degli stessi – quello di solidarietà *in primis* – è spesso di difficile comprensione immediata e spontanea accettazione, tanto da rendersi opportuna una pratica educativa volta in tal senso; intesa in questa prospettiva, si riuscirebbe, così, ad «apprezzare la natura interrelata delle nostre vite e delle nostre azioni rispetto al resto della comunità» (Rossi, 2018). All'interno di tale ricostruzione, ciascuno potrebbe accogliere con positiva collaborazione sia limitazioni delle proprie (pur legittime) pretese a fronte di altre situazioni (che vantano un diverso e contrapposto interesse meritevole di tutela) sia fattispecie di rinunce attuali in nome di esigenze di reciproca solidarietà. Secondo tale prospettiva, il singolo non verrebbe considerato solo nella sua individualità, ma anche come parte di una formazione sociale e l'interprete dovrebbe, di conseguenza, affrontare il tema con uno sguardo di più ampio respiro: il singolo oggi sarà chiamato a rinunciare a qualcosa ma in futuro verrà ricompensato da una continua ricerca e – si confida – dal raggiungimento di una realizzazione armoniosa e compromissoria dei principi in Costituzione, nella considerazione che dai «sacrifici di tutti si [può ricavare] un “surplus” (non necessariamente materiale...) per tutta la comunità/Stato» (Rossi, 2018).

Pur nella consapevolezza che la tecnica modulativa produce gravi violazioni delle regole procedimentali che regolano il processo costituzionale (delle quali si darà conto nel proseguo della relazione) si riconosce, in ragione di un approccio pluralistico e di valorizzazione del principio solidaristico, l'oppor-

⁴ Si veda RODOTÀ (2014).

tunità di ammettere, in ragione di una giustizia materiale onnicomprensiva, che, in casi determinati, una norma illegittima sia da considerare conforme al testo costituzionale almeno per le fattispecie sorte anteriormente alla sentenza di incostituzionalità o, detto in altri termini, per quel lasso temporale che intercorre fra il giorno della declaratoria d'incostituzionalità e un momento nel passato, che può coincidere con il giorno in cui la normativa illegittima è entrata in vigore.

2.2 **Dentro il bilanciamento «successivo»: accertamento dell'omogeneità valoriale e materiale delle posizioni giuridiche oggetto di ponderazione**

I due principi fondamentali appena richiamati (pluralismo e solidarietà) suggeriscono l'esistenza sistemica di un generale spazio applicativo della tecnica *de qua*; essi possono essere, quindi, definiti come quelle condizioni necessarie per ammettere, nei singoli casi, una gestione del tempo da parte dei giudici costituzionali. Esse, però, devono essere considerate come elementi necessari, ma non certo sufficienti per ammettere la modulazione temporale nelle singole fattispecie. Per poter procedere oltre bisognerebbe analizzare il rapporto che, s'ipotizza, dovrebbe intercorrere fra il diritto di cui la Corte chiede il temporaneo sacrificio e il principio che con la clausola di irretroattività si vuole tutelare, con l'obiettivo di enucleare il primo limite alla tecnica in esame.

Perché questo atto di privazione sia ammissibile si potrebbe prospettare la necessità di sottoporre la relativa operazione a due differenti test di legittimità, che valuterebbero l'omogeneità, prima, valoriale e, poi, materiale del bilanciamento. Con riferimento al primo profilo si assume che il diritto che s'intende sacrificare dovrebbe avere un valore inferiore o pari rispetto a quello risultante dall'analisi dell'impatto ordinamentale; nel caso in cui, invece, il primo sia superiore al secondo, la Corte non potrebbe operare alcun bilanciamento successivo.

Tenendo in considerazione la varietà della natura e della pregnanza dei diritti, è, in realtà, possibile osservare come il grado di incisività di un diritto o di un principio generale (per esempio quello di equilibrio di bilancio) non può essere valutato in modo aprioristico, ma in relazione alla natura dei diritti coinvolti; la loro forza costituzionale si spiega, quindi, proprio in virtù del raffronto con il secondo termine di paragone.

Sempre all'interno di questo test valutativo rientrano anche le condizioni congiunturali del caso di specie, che la Corte dovrebbe tenere in considerazio-

ne nella formulazione di un proprio convincimento. L'individuazione di un'omogeneità valoriale è, quindi, l'esito di un procedimento complesso, in cui all'interpretazione costituzionalmente orientata delle fattispecie in esame, intese in senso astratto, si associa una valutazione concreta – intrisa di componenti necessariamente soggettive – del giudice costituzionale, il quale è chiamato, con la propria decisione, ad essere quel raccordo necessario per poter valutare complessivamente tutti i coefficienti della decisione. Un'operazione come questa può essere considerata una via d'accesso per prospettare, almeno in linea teorica, la possibilità di limitare l'efficacia temporale di una sentenza demolitoria. Intesa in tal senso, quindi, la modulazione temporale non incoragerebbe «la Corte ad assumere un ruolo che non è il suo, ma piuttosto [a] contribuire a fare in modo che [essa] assuma più pienamente la responsabilità di questo suo ruolo» (Panunzio, 1989, 285).

Considerata la problematicità di fondo della tecnica *de qua*, in quanto il sacrificio che si richiede al singolo (s'intendono anche i soggetti parti di altri processi pendenti aventi una situazione comparabile) è di veder frustrate le proprie legittime aspettative, si auspica che il ragionamento dei giudici di Palazzo della Consulta tenga conto di un secondo profilo d'indagine, il test per accertare un'ipotizzabile omogeneità materiale fra il sacrificio del singolo e il principio che s'intende garantire con la clausola di irretroattività.

In esito a questa riflessione e con riferimento al secondo test, è quanto meno opportuno che il rapporto fra le due componenti sia – almeno – materialmente omogeneo; non s'intende certamente che le due fattispecie debbano avere la medesima natura, ma che il diritto in questione sia in qualche misura compensativo del suo sacrificio, individuando un punto di contatto sostanziale fra il singolo e l'interesse/diritto posto in antitesi.

Qualora, in esito a una valutazione combinata che innerva sia un livello astratto sia uno concreto, si accerti la pari dignità dei due diritti o la superiorità dell'interesse leso dall'eliminazione retroattiva rispetto all'altro, allora la Corte, per tutelare la Costituzione nella sua integrità e per evitare di incorrere in un'ulteriore, più grave, situazione d'incostituzionalità, potrà limitare la portata retroattiva della sua pronuncia. Inoltre, quando il contrasto che si crea ha ad oggetto diritti appartenenti alla medesima categoria, per esempio diritti sociali, si può ritenere che l'omogeneità valoriale sia determinata e valorizzata, non solo dalla condivisione del medesimo livello di meritevolezza di tutela, ma soprattutto dal fatto che essi condividono la stessa natura, rintracciabile negli artt. 2 e 3 della Costituzione.

2.3 La sentenza n. 10/2015 come esempio di modulazione temporale

Queste considerazioni di ordine sistematico discendono direttamente dallo studio della pronuncia n. 10 del 2015, che rappresenta, in tema di modulazione temporale, una «sentenza spartiacque» (Morrone, 2015, 594), un «primo precedente» (Morrone, 2015, 578). Infatti, proprio in quella sede, i giudici costituzionali hanno deciso di apporre alla sentenza di incostituzionalità una clausola di irretroattività, al fine di contemperare tutti gli interessi in gioco, autolegittimandosi, così, titolari di un potere sul tempo delle pronunce di accoglimento.

La stessa pronuncia n. 10 offre la possibilità di ipotizzare possibili innovativi sviluppi della tecnica utilizzata; sono, infatti, gli stessi giudici costituzionali, nell'argomentare la bontà della propria decisione, a riferirsi genericamente ad altri principi che possono giustificare la «eventuale necessità di una graduazione degli effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti» (Corte cost. n.10/2015, cons. in diritto, § 7).

In quella sede i giudici costituzionali hanno bilanciato la pretesa legittima delle parti ricorrenti (e di tutti i soggetti parimenti coinvolti) di poter beneficiare della decisione assunta in esito al processo costituzionale con l'interesse, non immediatamente percepibile, di quei soggetti che sarebbero stati lesi dalla totale retroattività della sentenza; secondo la cognizione della Corte, infatti, le restituzioni dei versamenti tributari nascenti dalla declaratoria d'incostituzionalità avrebbero determinato la violazione del principio dell'equilibrio di bilancio, posto al novellato art. 81 Cost., e, conseguentemente, per l'esigenza di evitare una grave voragine nelle finanze statali, un ingente pregiudizio dei principi di uguaglianza e di solidarietà sociale. I giudici costituzionali hanno, quindi, fondato la propria decisione proprio su esigenze di natura solidaristica; infatti, hanno voluto ricomporre una situazione di incostituzionalità materiale, evitando che le società petrolifere potessero recuperare la ricchezza ottenuta da una particolare e favorevole congiuntura economica a danno di una generalità indistinta di consociati, che avrebbero dovuto sostenere – attraverso una misura finanziaria aggiuntiva – il peso di quel rimborso.

3. UN APPROCCIO ESTENSIVO DELLA MODULAZIONE TEMPORALE

La «chiara vocazione dottrinale» (Pinardi, 2015, 222) della sentenza n. 10/2015 sembra, quindi, suggerire la possibilità di immaginare ed ipotizzare

un approccio estensivo della tecnica modulativa e, a tal proposito, la pista di ricerca è volta ad estrapolare la stessa dal suo contesto di riferimento (la notissima Robin Hood Tax, dichiarata incostituzionale con la pronuncia in esame) ed intraprendere un percorso analitico per tentare di raggiungere il *cuore* della pronuncia, un cuore che se trapiantato in altre situazioni, fattispecie controverse e casi di importanza sociale, economica e giuridica rilevanti può realmente permettere ai giudici costituzionali di porsi come moderatori di quegli interessi che altrimenti non verrebbero adeguatamente tutelati.

È possibile accertare che nella sentenza n. 10 siano stati rispettati entrambi i criteri individuati appena *supra* (omogeneità valoriale e materiale); non essendo in gioco diritti sociali ma patrimoniali e avendo a mente le condizioni emergenziali, sociali e congiunturali della fattispecie in commento, si può ritenere che esista un'omogeneità valoriale fra gli interessi coinvolti. Unitariamente a questo primo accertamento, inoltre, è possibile almeno supporre che sussista anche un'omogeneità materiale fra le rispettive prestazioni (essendo entrambe a contenuto patrimoniale) e che, quindi, la tecnica modulativa possa considerarsi ammessa.

Se la riflessione fosse chiusa entro i confini dell'art. 81 Cost, probabilmente non avrebbe alcun senso cercare di enucleare (nella speranza che le scelte di politica legislativa possano volgere nella medesima direzione) un eventuale potere ordinario della Corte in tal senso. Ciò anche in considerazione del fatto che, nella pronuncia n. 10, a preoccupare i giudici costituzionali non vi era unicamente l'esigenza del mantenimento dell'equilibrio di bilancio, ma anche la tutela degli artt. 2 e 3 Cost., che sarebbero stati irreparabilmente violati dalla manovra finanziaria aggiuntiva resasi necessaria⁵; ne esce, quindi, limitato il carattere pregnante dell'art. 81 Cost. come fattore di decisione.

Seguendo il medesimo procedimento analitico, si può ritenere che non esista, invece, un'omogeneità né valoriale né materiale fra i diritti sociali e l'equilibrio di bilancio, in quanto il riconoscimento dei primi rappresenta l'essenza del modello di Stato sociale delineato in Costituzione e, quindi, quando venisse accertata la violazione del nocciolo duro di quel determinato diritto, esso non potrebbe successivamente soccombere in esito a una sentenza di accoglimento, nel caso in cui l'interesse contrapposto fosse l'art. 81 Cost.

Nel momento in cui il legislatore circoscrive la fruibilità di un diritto sociale appellandosi a criteri di adeguatezza, necessità e proporzionalità, la Corte dovrà riconoscere l'opportunità di tale compromesso. Se, invece, la normativa espugna la forza del «nucleo incompressibile» (Pallante, 2016, 2522)

⁵ Si veda DICKMANN (2015).

dei diritti sociali, il Giudice delle Leggi dovrà dichiarare l'incostituzionalità della normativa; in tal caso, data l'impossibile composizione valoriale e materiale delle contrapposte situazioni giuridiche, la Corte non potrà limitare l'efficacia temporale delle sue sentenze.

3.1 Dalla teoria alla prassi: alcuni esempi concreti

Per dare qualche altro riferimento concreto si propongono due casi che, pur essendo solo ipotetici, possono far intuire la bontà della tecnica modulativa.

Si pensi, per esempio, alla fattispecie in cui una normativa statale o regionale incentivasse lo sviluppo di un settore economico in un'area geografica, non tenendo in considerazione che, per particolari condizioni morfologiche ed ambientali, la stessa si presentasse inadatta, rilevando così forti violazioni dell'interesse generale alla tutela ambientale e del territorio. La Corte, ipoteticamente adita in via incidentale per tutelare il diritto alla tutela dell'ambiente, dovrebbe soppesare il diritto d'impresa delle aziende che hanno dato avvio a una florida attività economica e il già menzionato diritto all'ambiente. In casi come questi, i giudici costituzionali potrebbero pronunciare una sentenza d'incostituzionalità della normativa (in difesa dell'interesse alla tutela ambientale), limitandone però l'efficacia temporale, per dare voce a quanti, esplicitando la propria libertà d'impresa, hanno stanziato sia ingenti risorse e mezzi, sia grandi aspettative di profitto; in questo modo la Corte costituzionale saprebbe riconoscere il punto di minor sofferenza fra gli interessi in gioco e assicurare un intervento globale in difesa dei valori proclamati in Costituzione.

Una seconda prospettiva di indagine prende le mosse dalla sentenza n. 85 del 2013, una delle decisioni del c.d. caso Ilva, con la quale la Corte si è pronunciata dichiarando infondate le questioni di legittimità proposte nei confronti degli artt. 1 e 3 del decreto legge n. 207 del 2012.

Senza voler entrare nel merito di quel sindacato, è interessante approfondire il contenuto dell'atto sottoposto a giudizio e valutare se, in assenza di quel decreto «volto a rendere compatibili la tutela dell'ambiente e della salute con il mantenimento dei livelli di occupazione» (Corte cost. n. 85/2013, cons. in diritto, § 7.1), la Corte costituzionale, chiamata a valutare una diversa legislazione, avrebbe potuto riconoscere la violazione del principio fondamentale alla salute (art. 32 Cost.) e, allo stesso tempo, limitare la portata retroattiva della pronuncia per tutelare il diritto al lavoro (art. 4 Cost.).

Ad esempio, nel caso in cui il Governo avesse adottato un atto normativo che, invece di contemperare gli interessi in gioco, avesse riconosciuto unica-

mente l'opportunità di tutelare il diritto alla salute (o, più probabile, quello al lavoro dei dipendenti) ben si potrebbe prospettare, sempre in via ipotetica, che un giudice ordinario avrebbe potuto sollevare un dubbio di costituzionalità con riferimento alla lesione del diritto alla salute, nascente dalla continuazione dell'attività produttiva negli stabilimenti Ilva. I giudici costituzionali avrebbero, con ogni probabilità, riconosciuto la violazione del principio fondamentale alla salute, in quanto le condizioni produttive dell'Ilva hanno determinato comprovati rischi alla vita umana e all'ambiente.

Assumendo, però, l'impatto ordinamentale (nella sua accezione sociale) come fattore del *decisum*, i giudici costituzionali avrebbero potuto garantire una tutela universale del sistema, statuendo materialmente quello che, nel decreto legge in parola, viene previsto espressamente dall'Esecutivo.

Ciò garantirebbe ai lavoratori di poter continuare a percepire il proprio stipendio e di avere un tempo utile per cercare un'altra occupazione senza ledere definitivamente, grazie alla temporaneità di tale disciplina transitoria e al necessario rispetto di alcune modalità di intervento (destinate a garantire l'utilizzo di tecniche migliorative che tutelino l'ambiente e la salute), l'ineliminabile diritto posto all'art. 32 Cost.

Entrambe le fattispecie individuate appena *supra* possono essere lette sia nella loro dimensione pluralistica sia come espressione di quel principio di solidarietà del quale ciascuno dovrebbe sentirsi responsabile e attento collaboratore. Ciò, ovviamente, solo nei casi in cui, per raggiungere quel punto di minor sofferenza di cui si parlava prima, si renda necessario richiedere un sacrificio e operare un bilanciamento fra interessi contrapposti, al fine di realizzare una giustizia materiale che, tenendo in considerazione tutti i valori in gioco, sia il più armoniosa possibile.

4. ASPETTI PROBLEMATICI DELLA TECNICA MODULATIVA: VIOLAZIONE DEL REQUISITO DI INCIDENTALITÀ DEL PROCEDIMENTO COSTITUZIONALE

Per concludere è opportuno dar conto dei plurimi profili problematici, ampiamente documentati in dottrina⁶, che la tecnica *de qua* genera con riferimento alle regole procedurali, ovvero il requisito della rilevanza e – ancora più pregnante – la logica del giudizio in via incidentale (combinato disposto dell'art 136 Cost., l. cost. 1/1948 e art. 30, comma 3, l. 87/1953).

⁶ Si veda, fra i tanti, ROMBOLI (2015), D'AMICO (2015), D'AMICO, BIONDI (2018).

Con riferimento al secondo profilo – l'unico che s'intende qui approfondire – si osserva come lo scopo della tecnica modulativa, più volte richiamata, si scontra con le regole con cui la stessa Corte procede; pur rappresentando, forse, il profilo più impervio riferito all'opportunità della tecnica in commento, in questa sede non si potrà che sfiorare i problemi generali che sono stati posti. Ciò anche in considerazione del fatto che una risposta univoca sembra ad oggi impossibile; sembra infatti, esistere un vincolo fra le rigide barriere delle regole procedurali (prima fra tutte, quella della retroattività che, per i più⁷, non si risolve in prescrizioni di mera forma, ma di sostanza, di uguaglianza e di certezza del diritto) e la necessità di un temperamento delle stesse e di un allargamento dei poteri decisorii della Corte costituzionale (un'estensione non fine a se stessa ma orientata, a sua volta, ad ampliare sempre più e sempre meglio, la fruibilità dei diritti, in particolar modo quelli sociali).

Un dato da non trascurare è il carattere ibrido del sistema di costituzionalità italiano, che pone la Corte in un «crocevia fra esigenze di opposta natura» (Pinardi, 2018, 476), quelle concrete, provenienti dal giudizio *a quo*, e quelle di interesse generale, determinate dall'impatto ordinamentale e sociale di una pronuncia demolitoria.

L'efficacia irretroattiva della pronuncia di accoglimento ha attratto il maggiore interesse dei costituzionalisti, perché da essa si genera un pericoloso «arresto cardiaco» (Pugiotto, 2015, 3), una vertiginosa frattura fra giudizio *a quo* e processo costituzionale, perché ad ogni giudice si richiede la «responsabilità etica» (Pace, 1989, 57) di non applicare una norma di cui si sospetta l'incostituzionalità, di sollevare il relativo dubbio e di rimettere la decisione alla Corte costituzionale. Qui, però, sembra che l'ingranaggio s'incepisca definitivamente perché al riconoscimento di una giusta pretesa si ricollega, in alcune occasioni, l'impossibilità di darne conto nel processo ordinario.

È chiaro che permettere di poter applicare la sentenza di incostituzionalità almeno nel giudizio *a quo* attenuerebbe le gravi problematiche che la tecnica modulativa genera; in una riflessione che auspica di ricostruire in modo globale il tema di analisi si propone una considerazione che conduce il ragionamento – almeno – a un ripensamento della soluzione pianamente condivisa in dottrina; salvando il giudizio *a quo*, le altre situazioni pendenti, ancora giustiziabili, godrebbero di un trattamento peggiore (con evidenti violazioni del diritto di uguaglianza) come se con riferimento a queste si verificasse una decadenza o una prescrizione. Lunghi dal voler e soprattutto poter individuare una

⁷ Si veda D'AMICO (2015, 3).

soluzione definitiva, si riconosce l'opportunità di valutare anche questo argomento di riflessione.

Per continuare a ragionare lungo il binario della giustizia, piuttosto che su quello del procedimento costituzionale generalmente inteso, sembra evidente che, affrontando l'argomento ancorandosi esclusivamente ai fermi binari del diritto positivo e alle sue condivise interpretazioni, da quell'«arresto cardiaco» non sarà possibile rinvenire. Se, però, si riconosce l'opportunità politica (se per politica s'intende una scelta tra due o più diritti costituzionali) e di giustizia sostanziale della tecnica modulativa, diventa necessario riflettere sul rapporto, di machiavelliana memoria, fra mezzo e fine e chiedersi se il processo costituzionale debba costituire sempre e in ogni caso un limite invalicabile alla giustizia costituzionale e, prima di tutto, «capire quale sia il limite oltre il quale non sia accettabile [...] interpretare in maniera elastica o disapplicare i vincoli che attengono al giudizio costituzionale» (Catalano, 2018, 399). Forse si potrebbe conferire al fine sostanziale un'importanza maggiore nel sistema e riconoscere che sia opportuno utilizzare anche mezzi non convenzionali e non disciplinati che, nel rispetto di alcuni rigidi requisiti, permettono di cogliere un'*aurea mediocritas* fra mezzo e fine, fra processo e giustizia. La modulazione si pone nel novero di questi strumenti e diventa, così, non solo permessa ma anche doverosa.

5. CONCLUSIONI

Nelle note conclusive del presente scritto s'intende proporre una riflessione, partendo da una domanda. La relativa risposta, al netto delle cose che sono state dette, riassume la posizione di chi scrive. Ci si chiede se, il raggiungimento di «quel tanto di giustizia che è possibile ottenere» (Panunzio, 1989, 281) in un determinato momento può considerarsi risolutivo, riuscendo a superare i limiti processuali, se non sotto il profilo procedimentale (cosa pacificamente impossibile), almeno in ordine alla tenuta del nostro ordinamento democratico. Se si analizzasse la tecnica modulativa solo come mero strumento formale nelle mani della Corte, non sarebbe certamente possibile accogliere la stessa nel sistema. Per ammettere con favore la tecnica *de qua* è necessario cogliere quel fine *sacro* che i giudici costituzionali perseguono con rigore, facendosi guidare dai principi di ragionevolezza e uguaglianza, avendo ben a mente che sarebbe quantomeno paradossale far sì che l'organo chiamato ad attuare i principi costituzionali si renda responsabile di una speculare violazione.

Non solo. Predisporre uno strumento, la modulazione temporale, che conferisca una certa duttilità al controllo di costituzionalità crea una valida alternativa – anche se non completamente legittimata nel sistema – affinché i giudici costituzionali, a fronte di indici di incostituzionalità nella normativa sindacata, non siano portati a optare per una soluzione negativa, a causa della conclamata carenza di uno strumento in tal senso.

Riconoscendo la bontà della tecnica modulativa, è comunque necessario individuare alcuni saldi requisiti atti a circoscrivere la portata di tale prassi. Tali precise indicazioni sono state individuate partendo proprio dalla sentenza n. 10/2015, unica vera applicazione della tecnica *de qua*; infatti, si può pacificamente sostenere che in quella sede le stesse non siano state rispettate in modo completo.

Il primo profilo (che si riconosce essere presente nella sentenza n. 10) è la precisa individuazione della natura e del valore dei diritti che si contrappongono in esito a una sentenza demolitoria, in quanto la compensazione fra elementi non omogenei tronca sul nascere la possibilità per la Corte di procedere con la modulazione temporale delle sue pronunce di accoglimento.

Il secondo, invece, si riferisce all'attività istruttoria, prima, e al requisito motivazionale della sentenza, poi; quest'ultimo, in particolare, solo se risulta elaborato, persuasivo ed attento riesce ad arginare i rischi di una incontrollabile discrezionalità.

Operando entro questi fermi limiti sostanziali e procedurali, si potrebbe – forse – conferire alla sentenza con efficacia irretroattiva una quale riconoscibilità, necessaria affinché la decisione venga «compresa» ed accolta dalla giurisprudenza ordinaria (soprattutto dal giudizio *a quo*) e dalle parti variamente interessate. Nella parte motiva i giudici costituzionali devono ricostruire il dato fattuale e spiegare rigorosamente i criteri e le ragioni attraverso i quali hanno deciso di modulare il tempo della pronuncia; intesa in questo senso, quindi, la motivazione diventa elemento di legittimità di questa relevantissima facoltà.

6. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- AA. VV. (1989), *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle sentenze straniere: atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta, il 23 e 24 novembre 1988*, Giuffrè, Milano.
- CATALANO, S. (2018), «Svalutazione della rilevanza della questione di costituzionalità ed effetto della decisione della Corte sul giudizio *a quo*», in D'AMICO; M.;

- BIONDI, F. (a cura di), *La Corte costituzionale e i fatti: Istruttoria ed effetti delle decisioni*, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 359-400.
- CELOTTO, A. (2014), *La Corte costituzionale*, Il Mulino, Bologna.
- D'AMICO, M. (2015), «La Corte e l'applicazione (nel giudizio *a quo*) della legge dichiarata incostituzionale», in *Forum di Quaderni costituzionali Rassegna*, 4, 1-4.
- D'AMICO, M.; BIONDI, F. (a cura di) (2018), *La Corte costituzionale e i fatti: Istruttoria ed effetti delle decisioni*, Editoriale Scientifica, Napoli.
- DICKMANN, R. (2015), «La Corte costituzionale torna a derogare al principio di retroattività delle proprie pronunce di accoglimento per evitare “effetti ancora più incompatibili con la Costituzione”», in *Federalismi.it.*, 4, 1-15.
- GROPPI, T. (2002), «Verso una giustizia costituzionale “mite”? Recenti tendenze dei rapporti tra Corte costituzionale e giudici comuni», in *Politica del diritto*, 2, 217-235.
- MORRONE, A. (2015), «Le conseguenze finanziarie della giurisprudenza costituzionale», in *Quaderni costituzionali*, 3, 575-606.
- PACE, A. (1989), «La tutela costituzionale al diritto di agire nei rapporti pendenti», in *Quaderni costituzionali*, 1, 51-60.
- PALLANTE, F. (2016), «Dai vincoli “di” bilancio ai vincoli “al” bilancio», in *Giurisprudenza costituzionale*, 6, 2499-2523.
- PANUNZIO, S. P. (1989), «Incostituzionalità “sopravvenuta”, incostituzionalità “progressiva”», in *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle sentenze straniere: atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta, il 23 e 24 novembre 1988*, Giuffrè, Milano, pp. 274-285.
- PINARDI, R. (2015), «La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d'incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività», in *Consulta Online*, 1, 220-231.
- (2018), «La declaratoria d'incostituzionalità tra impatto ordinamentale ed effetti sul giudizio *a quo*: la Corte alla prova dei fatti», in D'Amico, M.; Biondi, F. (a cura di), *La Corte costituzionale e i fatti: Istruttoria ed effetti delle decisioni*, Editoriale Scientifica, Napoli, pp. 439-477.
- PINO, G. (2010), «Conflitti tra diritti fondamentali. Una critica a Luigi Ferrajoli», in *Filosofia politica*, 2, 287-304.
- PUGIOTTO, A. (2015), «Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale», in *Forum di Quaderni costituzionali Rassegna*, 4, 1-6.
- RODOTÀ, S. (2014), *Solidarietà: un'utopia necessaria*, Laterza, Roma-Bari.
- ROMBOLI, R. (2015), «L'“obbligo” per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale *ab origine*: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti», in *Forum di quaderni costituzionali Rassegna*, 4, 1-24.

- ROSSI, E. (2018), *La doverosità dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale?*, Relazione introduttiva al Seminario annuale del Gruppo di Pisa, in 'https://www.gruppodipisa.it/images/seminari/2018_Seminario_Napoli/Emanuele_Rossi_La_doverosita_dei_diritti.pdf'
- SAJA, F., (1989), «Introduzione ai lavori del seminario», in *Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle sentenze straniere: atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta, il 23 e 24 novembre 1988*, Giuffrè, Milano, pp. 2-4.
- SILVESTRI, G. (1989), «Gli effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale», in *Quaderni costituzionali*, 1, 61-66.
- STEVANATO, A. (2018), «Oltre la sentenza n. 10/2015: la modulazione temporale degli effetti delle sentenze di accoglimento fra limiti costituzionali e nuove prospettive della giustizia costituzionale», in *Osservatorio costituzionale AIC*, 3, 185-210.